

á la institucion que es el medio (artículo primero de la Constitución.)

Que para mayor garantía de los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringida por el artículo 109 de la Constitución federal, que les impone el deber de adoptar la forma de gobierno representativo popular; de manera, que se vería infringido además este precepto constitucional, si la incompetencia que se objeta á la autoridad, fuera por su origen contraria á esa forma de gobierno.

Que por tales razones, y para no dejar violada una garantía individual ni quebrantado un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el examen, de si el Magistrado Trejo ha sido bien nombrado bajo el punto de vista de la Constitución federal.

Que una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta forma esencialmente, en que por lo menos, los Poderes Supremos sean electos como se consignan por la misma Constitución del Estado, es consecuente que el Magistrado de que se trata, no puede ser nombrado sino por elección popular, ó de lo contrario será incompetente.

Por estas consideraciones, y por los propios legales fundamentos en que se apoya la sentencia de Juzgado de Distrito, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Concepcion Pinzon de Cobo.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez, el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Maria Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Gar-

za.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Anza.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 10 de 1873.—Lic. Enrique Landa, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Andres Serrato, contra el Gobierno del Estado que lo destituyó del empleo de Procurador de primera instancia, sin formación de causa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez segundo de Distrito.

En el juicio de amparo que ha promovido el C. Lic. Andres Serrato, contra el Gobernador del Estado, por haberlo destituido del empleo de procurador de primera instancia de esta Capital, hay ciertas constancias que comprueban los hechos siguientes: que el nombramiento que se hizo de la persona del quejoso para que desempeñara el ministerio público, fué con total arreglo á la fracción 13 del artículo 74 de la Constitución particular del Estado y del artículo tercero de la ley de 12 de Junio de 1871; que una vez nombrado, en virtud del artículo quinto de esta ley, adquirió un derecho robusto para desempeñarlo por el término de seis años; y que durante este tiempo, no podía ser removido arbitrariamente de ese destino, segun prevencion expresa del artículo 149 de la Constitución citada.

Ahora bien: ¿la destitucion que ha determinado el Gobernador y que sirve de fundamento á este recurso, puede reputarse de algun modo que es legal? ¿no se opone á las garantías qua la Constitución general

de la República otorga al C. Lic. Torres Serrato?

En mi humilde concepto, tal destitucion es atentatoria, por estar dictada por autoridad que no tiene facultades á ese respecto. Las leyes antes invocadas, demuestran tan lamentable verdad; por lo mismo no me detendré en hablar una palabra mas sobre la ilegalidad del acto reclamado, y solo me ocuparé de si éste acto es anticonstitucional, para saber si procede ó no el amparo intentado.

A toda luz, C. Juez, es evidente que el C. Serrato, estuvo en quieta y pacífica posesion del empleo de procurador de primera instancia desde Mayo del año proximo pasado hasta Agosto último; así lo han reconocido los Tribunales tanto Supremo como Superior, y aun el mismo ejecutivo con el hecho de no haber pretendido nulificar ese nombramiento, en mas de un año que á ciencia y paciencia suya disfrutó de él el promovente; tambien es evidente, que la posesion de ese empleo há debido disfrutarla por seis años, según la ley orgánica de 12 de Junio ya citada: luego si alguna autoridad lo ha inquietado en ella durante ese periodo, sin causa justificada, ha infringido el artículo 16 de nuestro Código fundamental, que dice: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Que el Gobernador no es autoridad competente para haber determinado el procedimiento de que con tanta justicia se queja el C. Torres, lo demuestra el artículo 74 de la Constitución reformada, en su fraccion 12, que se explica así: "son atribuciones y deberes del Gobernador, nombrar y remover libremente al Secretario del despacho, y demas empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado en esta Constitución ó no cometan las leyes á otras autoridades;" es así que el nombra-

miento de procuradores de primera instancia está determinado en la fraccion 13 del mismo artículo 74 de la propia Constitución: luego el Gobernador no puede nombrar ni remover libremente á los procuradores de primera instancia, por tener nombramiento determinado en dicha Constitución.

Pues en el caso de despojo que nos ocupa, tenemos: que el Gobernador, con infraccion manifiesta del artículo 149 de la siempre mencionada Constitución, ha removido de su empleo de procurador de primera instancia al C. Torres Serrato, abusando de las facultades que le estan concedidas: luego por este acto queda probado, que se ha violado en perjuicio del quejoso, la garantía que le concede el artículo 16 de nuestro Código fundamental, en aquella parte que previene: que nadie pueda ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad competente.

Hay que considerar tambien, si la causa es justificada y bastante para haber motivado el procedimiento de la destitución. La que alega la autoridad responsable en su informe relativo no es esacta, porque como ya he indicado, el nombramiento de los procuradores, según la Constitución y ley orgánica del ministerio público, se hace por el Gobernador del Estado á propuesta en terna del Tribunal Supremo, reunido en acuerdo pleno; y como se ve en la comunicacion de fojas 17 del cuaderno principal, el nombramiento del C. Torres Serrato, para que desempeñara la procuraduría, se hizo por el C. Gobernador del Estado que en esa memorable época lo era el justificado C. General Ignacio Alatorre, y á propuesta en terna del actual Tribunal Supremo, reunido en acuerdo pleno: luego ese nombramiento es válido, y el hecho de desconocerlo, con el frívolo pretexto de que fué emanado de la autoridad militar, no es bastante ni justificado para haber determinado el despojo que ha sufrido el desgraciado C.

Torres, á quien se ha debido considerar por los muchos y buenos servicios que mas de 30 años ha prestado al Estado con una remuneración casi ilusoria, por no habersele cubierto jamas los presupuestos que ha venido conforme á la ley, como lo tiene probado en autos.

De lo expuesto se deduce: que el artículo de la Constitución general, de que he hablado, se ha infringido de parte del Gobernador, no solo por falta de autoridad, sino por falta tambien de causa justificada para haber dispuesto la destitucion del C. Torres Serrato; en esa virtud el Promotor, sin analizar las otras infracciones de que se queja el promovente, por haberlo hecho ya él en su alegato, y poniéndole á V. de manifiesto que el C. Juez de Distrito de Zacatecas acaba de conceder amparo al Dr. Gomez Virgen, contra una providencia del Ayuntamiento de aquella Ciudad, que le destituyó del empleo de Médico de la Municipalidad, (caso análogo al nuestro) le pide á V. con fundamento del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, tenga a bien amparar al ya tantas veces repetido C. Lic. Torres Serrato, por haber sido privado de su empleo por autoridad incompetente.

Zaragoza, Setiembre 29 de 1873.—*Eugenio Sánchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Octubre 18 de 1873. Visto el recurso de amparo que el C. Lic. Andres Torres Serrato ha interpuesto contra el C. Gobernador del Estado, por violacion en su persona de las garantías otorgadas en los artículos 21 y 27 de la Constitución general, al destituirlo de su empleo de procurador de primera instancia; visto el informe de fojas 3; las pruebas producidas por el promovente, los pedimentos fiscales, con todo lo demás que debió tenerse presente. Considerando: que el C. Lic. Andres Torres Serrato fué nombrado procurador de primera

instancia, en Junio del año próximo pasado, con total arreglo á lo prevenido en el artículo tercero de la ley dada por el Congreso del Estado el 16 de Mayo, y sancionada el 12 de Junio de 1871, como lo justifica el certificado que á petición del promovente espidió el Tribunal Supremo.

Que á consecuencia de aquel nombramiento, el mismo C. Lic. Torres Serrato tomó posesion de su empleo en la forma establecida en la mencionada ley, artículo 45 título XII que trata de la posesion del cargo y de la protesta, cuyo empleo estuvo desempeñando hasta el 9 de Agosto último, en que se le dirigió el oficio de fojas 1 que ha dado materia al recurso de amparo.

Que en virtud de aquel nombramiento legal, y en virtud tambien de la posesion y protesta, el referido C. Lic. Torres Serrato contrajo obligaciones, al mismo tiempo que adquirió los derechos que le confieren los artículos 5928 y 70 de la repetida ley de 1871, derechos, que ó se suspenden, ó suspenden por la suspensión ó separación legal del funcionario.

Que la suspension, segun lo determinado en el capítulo XV de la mencionada ley de 71, solo procede (artículo quinto) por declarase que ha lugar á formación de causa cuando el jurado respectivo lo ordenó preventivamente, ó cuando la suspensión se halle establecida en calidad de pena ó corrección.

Que la separacion absoluta del funcionario del Ministerio público, en espresion del artículo 60 de la misma ley únicamente puede surtir efecto por medio de sentencia que cause ejecutoria, ó por la incapacidad física ó moral del que desempeña el cargo.

Que bajo este aspecto, la determinacion del C. Gobernador comunicada al C. Lic. Torres Serrato el 9 de Agosto último, en virtud de la que sin mas razonamiento ni motivo que él estimado conveniente, se le separó del empleo que desempeñaba, envuelve una infraccion flagrante de los artí-

culos 58, 28, 59 y 60 de la ya citada ley de Junio de 1871.

Que esa infraccion importa tanto como la violacion de las garantías que el Código fundamental del país otorga en los artículos 21 y 27, puesto que el Gobernador del Estado, al destituir al C. Lic. Torres Serrato de su empleo de procurador de primera instancia, no solo le ha aplicado una pena grave, lo que es exclusivo de la autoridad judicial, previos los requisitos de la ley, sino que ha cometido un atentado, atacando derechos legítimamente adquiridos por concesion expresa de una disposicion legal.

Que el procedimiento del C. Gobernador, no puede cohermutarse ni aun por lo prevenido en el artículo 174 de la Constitucion política del Estado, segun el cual, los empleos ó cargos no son propiedad ni patrimonio de ningun ciudadano, pues la violacion de las garantías de que se ha hecho mérito, procede tambien de la infraccion notoria de los artículos 148 y 149 de la misma Constitucion particular, que conceden al funcionario el derecho de permanecer en su empleo el tiempo fijado por la ley, y el de no ser destituido arbitrariamente, como se le destituye de este modo, si la destitucion trae el caracter de pena, y si ademas se ordena sin las formalidades legales y por autoridad incompetente.

Que tampoco pueden legalizar la determinacion del C. Gobernador, los conceptos vertidos en el informe de fojas 4, relativos á que no ha impuesto pena al C. Torres Serrato con el hecho de destituirlo de su empleo, en razon de que como se dice en el referido informe, debiendo cesar aquel letrado en el desempeño de la comision que le encargó, la autoridad militar emanada del Estado de sitio en que estuvo Puebla, unicamente se le hizo saber esa cesacion.

Que en cuanto á este último concepto, es fuera de duda que el Gobierno establecido á consecuencia del Estado de sitio, no solo emanó de una ley; es decir, no solo tenia un caracter de legitimidad, sino que re-

lativamente al caso de que se trata, ó sea al nombramiento que hizo recaer en el C. Lic. Torres Serrato, ajustó sus actos á la ley de la materia, no confiando una simple comision, sino nombrando á aquel procurador de primera instancia, previa la propuesta en terna, que durante el mismo estado de sitio remitió ó presentó el Supremo Tribunal, esto es, la autoridad á la que la ley del Estado inviste de esa facultad.

Que en cuanto al primer concepto, es inquestionable que habiéndose conferido al quejoso un empleo conforme á aquella misma ley, y entrado en posesion de él, adquirió derechos que no solo se vulneran, sino que se nulifican con una destitucion inmotivada y de procedencia ilegal, lo que importa mas que una pena, un despojo violento, por que tal es la destitucion del caracter de la que trata, que en su significacion natural, es el acto de exonerar á alguno de un empleo, cargo, ó dignidad, relevar bruscamente del desempeño de elevadas funciones, ó bien desposer en menor escala y remplazar con otro al separado (Dic de la lengua, palabra "Destitucion") todo lo que consumado por la autoridad, y sin las formalidades y requisitos de ley, entraña una violacion patente de los artículos 16, 21 y 27, de la Constitucion. Por lo espuesto, y con fundamento de los espresados artículos constitucionales, y de lo prevenido en la ley de 20 de Enero de 1869, se *declara*: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Andres Torres Serrato, contra la determinacion del C. Gobernador del Estado, fecha 9 de Agosto último, por lo cual quedó destituido aquel funcionario del empleo de procurador de primera instancia, que se le confirió con arreglo á la ley de 12 de Junio de 1871. Hágase saber, y sacándose previamente los testimonios respectivos de esta resolucion, para que se publique en el Periódico Oficial del Estado y Semanario Judicial, remítanse estos autos con atento oficio á la Suprema Corte de Justicia, haciéndose antes efec-

tivo lo que se previno en el auto anterior, sobre reposición del papel, con el del sello correspondiente. Lo decretó y firmó el suscrito Juez tercero suplente de Distrito. Doy fé.—*José de Jesus Lopez.*—Ante mí.—*Antonio Garcia Mozqueira.*

Es copia que certifico, la cual se saca en cumplimiento de lo mandado, para su inserción en el Semanario Judicial. Puebla, Octubre 27 de 1873.—*Antonio Garcia Mozqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 29 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Andres Torres Serrato ante el Juzgado de Distrito de Puebla, contra el Gobierno del Estado, que lo destituyó del empleo de procurador de primera instancia, sin formación de causa. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado, en que ninguna razón alega como fundamento para tal procedimiento; lo pedido por el C. Promotor fiscal; lo alegado por el promovente; la sentencia del inferior, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que si bien es cierto que segun el espíritu de la Constitución federal, no hay propiedad en los empleos, tambien lo es, que en casos como en el presente, estan escepcionados los empleos que tengan tiempo determinado para su desempeño. Que la Constitución del Estado, previene que los funcionarios que no tengan señalado tiempo de su duración, permanescan en sus destinos todo aquel á que los hagan acreedores sus servicios y buena conducta; y que el funcionario que promovió este juicio, tenia tiempo señalado por la ley de su creación: que tampoco aparece cierto que el C. Torres Serrato haya sido nombrado por la autoridad militar, sino con los requisitos establecidos por la misma ley, y que la destitución de que se queja el promovente sin previa formación de causa, im-

porta la violación de los artículos 16, 21 y 27 constitucionales.

Por estas consideraciones, y por los propios legales fundamentos del Juzgado de Distrito de Puebla, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Andres Torres Serrato, contra la determinación del C. Gobernador del Estado que lo destituyó del empleo de procurador de primera instancia.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Artaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 13 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido por los Sres. Bartinng hermanos y C^a ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el C. Tesorero general del Estado, que se negó á recibirles cierta cantidad de dinero en moneda de cobre, en pago de derechos de consumo de efectos extranjeros.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado la solicitud de amparo hecha por los Sres. Bar-